



# SPAIN

**INTERVENCIÓN DEL  
PROFESOR JOSÉ MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES**

**JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE  
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA**

**EN EL DEBATE GENERAL DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTE DE LA  
CORTE PENAL INTERNACIONAL**

**Nueva York, 7 de diciembre de 2017**

**(Cotejar con intervención definitiva)**

---

**STATEMENT BY  
PROFESSOR JOSÉ MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES**

**HEAD OF THE INTERNATIONAL LEGAL ADVISORY SERVICE OF THE  
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION OF SPAIN**

**AT THE GENERAL DEBATE OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES  
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**

**New York, 7 December 2017**

**(Check against delivery)**

Sr. Presidente,

Es para mí un gran honor dirigirme a esta Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en su XVI sesión.

España ha sido, desde el mismo inicio de la preparación del Estatuto de Roma, un ferviente defensor del papel encomendado a la CPI en la difícil labor de erradicar la impunidad con los instrumentos del Estado de Derecho internacional. Para mi país la lucha contra los más graves crímenes internacionales constituye un elemento imprescindible para el mantenimiento de la paz y la justicia internacional, así como es también una exigencia ineludible derivada del principio del Estado de Derecho.

Combatir la impunidad, procesando a los criminales que cometan tales crímenes y suministrar justicia a las víctimas, ha de ser una meta irrenunciable de toda la comunidad internacional. Sin duda alguna, mi país mantendrá en el futuro su tradicional respaldo cerrado y sincero a la labor del Tribunal.

Por ello, además de adherirnos al discurso pronunciado por la Unión Europea, querría celebrar la labor que desempeña la CPI.

Permítame, en este sentido, empezar felicitando al juez Kwon O-Gon por su elección como Presidente de esta Asamblea, a la par que agradecemos al Presidente saliente su excelente labor realizada y deseamos una fructífera labor a los 6 jueces recién elegidos.

Igualmente, querríamos extender este agradecimiento sincero a la Presidenta Fernández de Gurmendi, a la Fiscal Bensouda y a todo el personal de la Corte por la intensa labor desplegada durante el último año.

Sr. Presidente,

Mi delegación desearía comenzar subrayando los aspectos positivos del trabajo llevado a cabo por la CPI en el último año. Querría destacar ahora cuatro de ellos.

En primer lugar, la extensión del ámbito geográfico de la actuación de la Corte, que abarca cuatro continentes: América, África, Asia y Europa. La lucha contra la impunidad ante los crímenes internacionales no conoce (no debe conocer) de fronteras.

En segundo lugar, debemos congratularnos de la influencia de la CPI en la persecución a nivel estatal de los crímenes de su competencia. Son varios los supuestos en los que, en aplicación del principio de complementariedad, la Corte no ha ejercido su jurisdicción, por la intervención de los órganos jurisdiccionales nacionales.

En tercer lugar, deseamos celebrar la consolidación del papel del Fondo Fiduciario para las Víctimas, que constituye un pilar esencial del trabajo de la CPI.

Por último, también acogemos positivamente la primera condena de la Corte por delitos contra la administración de justicia con arreglo al artículo 70 del Estatuto de Roma, así como también la consideración dada a los ataques contra monumentos y edificios históricos.

Sr. Presidente,

Pese a la valoración indudablemente positiva que, en su conjunto, nos merece la actuación de la CPI, hay también al menos otros cuatro aspectos que reclaman cierta atención crítica.

El primero es la retirada de la República de Burundi, que se hizo efectiva hace apenas unas semanas, y el anuncio de retirada que hizo ayer Sudáfrica. La aspiración es que el número de Estados Parte en el Estatuto siga aumentando, sin que se produzca baja alguna. Debemos, en este sentido, celebrar que Gambia reconsiderara su decisión inicial de denunciar el Estatuto.

El segundo aspecto que constituye motivo de cierta preocupación tiene que ver con la colaboración entre la CPI y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creemos que el Informe de la Corte identifica muy bien los elementos en los que sería deseable mejorar esa colaboración, elementos que apuntan a las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y a su reacción (o no reacción) ante las notificaciones de no colaboración que le remite la CPI. Nos parece que hay que tomar buena nota de lo que dice el Informe de la CPI y reaccionar.

Un tercer elemento a destacar es que también los Estados debemos hacer lo propio, ya que la cooperación con la Corte y la adecuada ejecución de sus decisiones es capital para lograr la necesaria credibilidad del sistema. Particular atención merece a este respecto la cuestión de la detención de sospechosos.

Finalmente, creemos que conviene seguir llamando la atención sobre la necesidad de que la Corte logre un funcionamiento eficaz y eficiente, basado en la buena gobernanza y la transparencia, aunque somos conscientes de los esfuerzos y avances notables que la Corte viene realizando en los últimos tiempos.

De todas formas, Sr. Presidente,

Todos somos perfectamente conscientes que este año esta Asamblea se ve enfrentada a una cuestión particularmente delicada. Hemos de buscar una salida al desacuerdo existente en relación con la activación de la jurisdicción de la CPI para el crimen de agresión.

El Reino de España participó de forma muy activa en la Conferencia de Kampala. En consonancia con ello, mi país depositó el instrumento de ratificación de las enmiendas, de manera temprana, el 24 de septiembre de 2014.

El compromiso consensuado en la Conferencia de Kampala, plasmado en los artículos 8 bis, 15 bis y 15 ter, permitió entonces adoptar el texto de las enmiendas y clausurar exitosamente la Conferencia. Ahora, una vez superado el umbral de las 30 ratificaciones exigido para su entrada en vigor, corresponde a esta Asamblea de Estados Parte adoptar la decisión para activar la competencia de la Corte. Pero el problema de fondo ha vuelto ahora a emerger. Han

aflorado, así, posiciones sobre la interpretación de la puesta en marcha de las enmiendas que, según centren su mirada en el artículo 15 ter 3 o en el artículo 121.5, llegan a conclusiones no fácilmente compatibles entre sí.

En este sentido, España aboga, en primer término, por lograr el conveniente consenso dentro de la Asamblea de Estados Parte. Ahora bien, también defendemos con convicción la necesidad de cumplir con lo pactado en Kampala. Por tanto, la decisión que finalmente se adopte no debería suponer en modo alguno reabrir, de iure o de facto, la negociación de lo ya acordado en Kampala (y ya ratificado por 35 Estados).

España apoya, igualmente, las enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma y al artículo 8 de los Elementos de los Crímenes propuestas por Bélgica, para la inclusión de cuatro crímenes de guerra cuya característica común es el uso de armas causantes de inmenso sufrimiento o que matan indiscriminadamente, sobre la base de instrumentos jurídicos que ya han sido ampliamente ratificados.

En suma, Sr. Presidente,

España concluye esta intervención subrayando la importancia capital que la CPI tiene en el mantenimiento de la paz, la justicia y el Estado de Derecho a través de la lucha eficaz contra la impunidad frente a la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad, a la par que reiteramos el firme compromiso de nuestro país en la persecución de ese loable objetivo.

Muchas gracias.

Mr. President,

I have the honour to address this assembly of State Parties of the International Criminal Court on its 16th session.

Since the very beginning of the preparation of the Rome Statute, Spain has been a strong advocate of the role assigned to the ICC in the difficult task of fighting impunity with the tools of the international rule of law. The Fight against the most serious international crimes constitutes for my country an essential element to maintain universal peace and justice, and it is also an unavoidable request stemming from the principle of the rule of law. Fighting impunity, by holding the perpetrators accountable, and ensuring justice for victims must be inalienable goals for the whole international community. There is no doubt that my country will maintain in the future its traditional solid and sincere support to the work of the Court.

Hence, besides adhering to the speech delivered by the European Union, I would like to highlight the work undertaken by the International Criminal Court (ICC).

In this sense, allow me to begin by congratulating you for work as President of this Assembly of State Parties and by expressing my gratitude for your effort and dedication.

We would also like to extend this sincere gratitude for the intense work undertaken during last year to the President, Ms. Fernández de Gurmendi, to the General Attorney, Ms. Bensouda, and to the rest of the ICC personnel.

Mr. President,

My delegation would like to begin, as we did some weeks ago on the occasion of our intervention at the United Nations General Assembly, by underlining the positive aspects of the work undertaken by the ICC during last year. Now, I would like to highlight four of them. Firstly, the extension of the geographic scope of action of the ICC, that reaches four continents: America, Africa, Asia and Europe. The fight against the impunity of international crime knows no borders (and should not know them).

Secondly, we must salute the influence of the ICC on the State-level proceedings against the crimes under its jurisdiction. There have been many cases in which, pursuant to the principle of complementarity, the Court has not exerted its jurisdiction because of the intervention of the national jurisdictional bodies.

Thirdly, we would like to welcome the consolidation of the role of the ICC's Trust Fund for victims that, as the European Union has already stated, constitutes an essential pillar of the work of the ICC.

Lastly, we also welcome the first conviction of the Court for the commission of offences against the administration of justice on application of article 70 of the Rome Statute, as well as the consideration given to attacks against monuments and historical buildings.

Mr. President,

Despite the undoubtedly positive assessment that we have of the actions of the ICC, there are also at least four other aspects that require a more critical approach.

The first one would be the withdrawal of Burundi, which became effective just some weeks ago. Our ambition is for the number of State parties of the Statute to continue increasing, without any withdrawals. We must, in this sense, celebrate that South Africa and Gambia reconsidered their initial decision of denouncing the Statute.

The second aspect that has been a source for some concern bears relation to the collaboration between the ICC and the United Nations Security Council. We believe that the Court's Report identifies well the elements in which improved collaboration would be desirable. Those elements point towards the sanctions approved by the Security Council and its reaction (or lack thereof) to the notifications of non-collaboration referred by the ICC. We consider we must take good notice of the ICC Report, and react accordingly.

A third element to note is that we, the States, must act likewise, since the cooperation with the Court and the adequate execution of its decisions is essential to achieve the system's necessary

credibility. Particularly worthwhile of our attention, in this respect, is the issue of the detention of suspects.

Finally, we believe that we must continue to draw attention to the need that the Court achieves an effective and efficient functioning, based on good governance and transparency. This does not in any way preclude our recognition of the efforts and notable advances that the Court has been carrying out in the recent times.

In any case, Mr. President,

We are all perfectly aware that this year this Assembly will be faced with a particularly sensitive issue. We must find a solution to the current disagreement regarding the activation of the ICC jurisdiction for the crime of aggression.

The Kingdom of Spain played a very active role at the Kampala Conference. Accordingly, my country submitted the instrument of ratification of the amendments quite early, on September 24th, 2014.

The compromise reached by consensus at the Kampala Conference, captured in articles 8 bis, 15 bis and 15 ter, permitted then the adoption of the text of the amendments and the successful closure the Conference. Now, once the threshold of 30 ratifications needed for their entry into force has been crossed, it is up to the Assembly of State Parties to adopt the decision to activate the Court's jurisdiction. But the underlying problem has now re-emerged. We have thus witnessed several positions about the implementation of the amendments which, by focusing either on article 15 ter 3 or on article 121.5, reach hardly compatible conclusions.

In this respect, Spain advocates, firstly, for reaching an advisable consensus within the Assembly of State Parties. However, we also defend with conviction the need to comply with what was agreed on in Kampala. Hence, the decision that is eventually adopted should not imply in any way a reopening, whether de iure or de facto, the negotiation of what was already agreed upon in Kampala (and which has already been ratified by 34 States).



Spain supports the amendments to article 8 of the Rome Statute and to article 8 of the Elements of Crimes proposed by Belgium, in order to include four war crimes with the common denominator of the use of weapons causing enormous suffering or which kill indiscriminately, on the basis of legal instruments which have been widely ratified.

To sum up, Mr. President,

Spain concludes this intervention by underlining the capital importance of the ICC in the maintenance of peace, justice and the rule of Law through the effective fight against impunity vis-à-vis the commission of the most serious crimes against humanity, while reiterating our country's firm commitment in the pursuit of this commendable objective.

Thank you very much.